

INE/CG1084/2021

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA DEL OTORRA CANDIDATO INDEPENDIENTE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DOLORES HIDALGO C.I.N., GUANAJUTO, EL C. JOSÉ JULIO GONZÁLEZ LANDEROS, IDENTIFICADO COMO INE/Q-COF-UTF/253/2021/GTO

Ciudad de México, 22 de julio de dos mil veintiuno.

VISTO para resolver el expediente número **INE/Q-COF-UTF/253/2021/GTO**, integrado por hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral en materia de origen, destino y aplicación de los recursos de los sujetos obligados.

ANTECEDENTES

I. Escrito de queja. El diez de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización recibió el oficio INE/UTF/GTO/115/21, signado por la C.P. Ma. Concepción Barrón Rodríguez, Enlace de Fiscalización en la Junta Local Ejecutiva del Instituto en el estado de Guanajuato, mediante el cual remite el escrito de queja presentado por el Mtro. Antonio Arredondo Aguilar, en su carácter de Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo Municipal Electoral de Dolores Hidalgo C.I.N., Guanajuato, del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en contra del otrora candidato independiente a la Presidencia Municipal de Dolores Hidalgo C.I.N., Guanajuato, el C. José Julio González Landeros, denunciando hechos que considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de Guanajuato (Fojas 01-09 del expediente).

II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de

Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su escrito de queja:

“(…)

HECHOS

PRIMERO. - Es el caso, que el día miércoles 28 de abril del 2021, siendo aproximadamente las 21:05 horas de dicho día (condición de tiempo), dentro del Proceso Electoral local 2020-2021, y dentro periodo de campañas electorales por la cual se contiene y nos ocupa, la renovación del Ayuntamiento del Municipio de Dolores Hidalgo C. I. N., Guanajuato, y SIN QUE TAL EVENTO DE CAMPAÑA ESTUVIERE REPORTADO EN LA AGENDA SEMANAL DEL CANDIDATO DENUNCIADO, que en acatamiento del numeral 212 del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, todo candidato tiene la obligación de informar a este órgano fiscalizador, el candidato independiente C. JOSÉ JULIO GONZÁLEZ LANDEROS, y en su caso, su asociación civil Una Carita Feliz, Libre e Independiente, en el parque público denominado Parque La Carolina de la colonia San Agustín de la ciudad de Dolores Hidalgo C. I. N., Guanajuato, que se ubica entre las calles Encino, Nogal y Bugarvilias (condición de lugar), presentó un evento público de promoción política de su candidatura en el cual, utilizo pirotecnia, la presentación de un espectáculo de Lucha Libre, mojigangas, la utilización de equipos de sonido profesionales, incluyendo maestro de ceremonias, y la colocación de publicidad específica del candidato y reparto de publicidad también específica (condición de modo), tal y como puede ser constatado con la videograbación denominada Lucha Libre 28 de abril uno, que obra en el medio electrónico anexo a este recurso, incluso de tal acto de campaña, el público en general asistente realizo publicaciones en la red social denominada FACEBOOK, que dan plena constancia, veracidad y certidumbre de mi dicho, por presentar un ejemplo de ello, solicito se observe el contenido de la videograbación denominada Lucha Libre 28 de abril dos, que obra en el medio electrónico anexo a este recurso, que puede ser constatado con la inspección del siguiente link https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=828321757792235&id=100018432548359&sfnsn=scwspwa publicado por el perfil denominado "Armando Jimenez" de la dicha red social Facebook.

SEGUNDO. - Es el caso, que el día miércoles 05 de mayo del 2021, siendo aproximadamente las 16:50 horas de dicho día (condición de tiempo), dentro del Proceso Electoral local 2020-2021, y dentro periodo de campañas electorales por la cual se contiene y nos ocupa, la renovación del Ayuntamiento del Municipio de Dolores Hidalgo C. I. N., Guanajuato, y SIN

QUE TAL EVENTO DE CAMPAÑA ESTUVIERE REPORTADO EN LA AGENDA SEMANAL DEL CANDIDATO DENUNCIADO, que en acatamiento del numeral 212 del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, todo candidato tiene la obligación de informar a este órgano fiscalizador, el candidato independiente C. JOSÉ JULIO GONZÁLEZ LANDEROS, y en su caso, su asociación civil "Una Carita Feliz, Libre e Independiente", realizo una marcha y/o caminata con un grupo de sus simpatizantes, encabezados por el propio candidato, en las vialidades de la ciudad de Dolores Hidalgo C. I. N., Guanajuato, que se denomina Calzada de los Héroes, partiendo del espacio y monumento publico denominado Monumento a los Héroes de la Independencia, realizando un mitin en el estacionamiento público de la Presidencia Municipal de Dolores Hidalgo, y continuando su caminata hasta el espacio y monumento publico denominado 'Monumento a la Bandera que se ubica en la esquina de la avenida Guanajuato y calle Quintana Roo de la zona centro de la ciudad de Dolores Hidalgo C. I. N., Guanajuato (condición de lugar), evento público de promoción política de su candidatura en el cual, utilizo un grupo musical de los comúnmente conocidos como Banda de Viento o Banda Sinaloense mojigangas, la utilización de equipos de sonido profesionales, incluyendo maestro de ceremonias, y la colocación de publicidad específica del candidato y reparto de publicidad también específica (condición de modo), tal y como puede ser constatado con la videograbación denominada Marcha Avenida de los Héroes, que obra en el medio electrónico anexo a este recurso, incluso de tal acto de campaña, el público en general asistente realizo publicaciones en la red social denominada FACEBOOK, que dan plena constancia, veracidad y certidumbre de mi dicho, ya que la videograbación mencionada fue publicada por el medio de comunicación televisivo llamado TV INDEPENDENCIA de cobertura regional y que publico en su página de Facebook el evento que puede ser constatado con la inspección del siguiente link <https://www.facebook.com/TvIndependenciaGrupoTeJevisivoGuanajuato/videos/317221273088438/> igualmente el propio candidato denunciado realizo una publicación en su propio perfil personal de la dicha red social Facebook y que corresponde a la videograbación denominada Banda Musical frente a presidencia, donde se observan las condiciones de modo, tiempo y lugar ya especificadas de sus gastos de campaña, y que puede ser constatado con la inspección del siguiente link <https://www.facebook.com/JJulioGonzalez/videos/788668695369604/> publicado por el perfil denominado José Julio González Landeros de la dicha red social Facebook, donde se observa al candidato denunciado realizar los actos ya descritos, y publicando los mismos.

TERCERO.- En adicción con 10 arriba manifestado, es el caso, que el día miércoles 05 de mayo del 2021, siendo aproximadamente las 21:25 horas de dicho día (condición de tiempo), dentro del Proceso Electoral local 2020-2021,

y dentro periodo de campañas electorales por la cual se contiene y nos ocupa, la renovación del Ayuntamiento del Municipio de Dolores Hidalgo C. I. N., Guanajuato, y SIN QUE TAL EVENTO DE CAMPAÑA ESTUVIERE REPORTADO EN LA AGENDA SEMANAL DEL CANDIDATO DENUNCIADO, que en acatamiento del numeral 212 del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, todo candidato tiene la obligación de informar a este órgano fiscalizador, el candidato independiente C. JOSÉ JULIO GONZÁLEZ LANDEROS, y en su caso, su asociación civil Una Carita Feliz, Libre e Independiente, en el espacio público denominado que se ubica en la esquina de las calles Corregidora con Campeche de la zona centro de la ciudad de Dolores Hidalgo C. I. N., Guanajuato, (condición de lugar), presentó un evento público de promoción política de su candidatura en el cual, utilizó pirotecnia, la presentación de un espectáculo de Lucha Libre, mojigangas; la utilización de equipos de sonido profesionales, incluyendo maestro de ceremonias, y la colocación de publicidad específica del candidato y reparto de publicidad también específica (condición de modo), tal y como puede ser constatado con la videgrabación denominada Lucha Libre 05 de mayo, que obra en el medio electrónico anexo a este ocurso, incluso de tal acto de campaña, el público en general asistente realizó publicaciones en la red social denominada FACEBOOK, que dan plena constancia, veracidad y certidumbre de mi dicho, que puede ser constatado con la inspección del siguiente link <https://www.facebook.com/100061353204408/videos/157113803010392/?sfns=n=scwspwa> publicado por el perfil denominado "Juan Lopez" de la dicha red social Facebook.

Con las video grabaciones arriba incorporadas, cuyo origen ha sido revelado por el suscrito, se demuestra inequívocamente que los emblemas y signos del candidato denunciado y los participantes en actos de campaña ahí expuestos, tienen la intención de persuadir al electorado para obtener la preferencia y el voto hacia el candidato aquí denunciado, tal como establece la siguiente jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que la letra dice:

[Jurisprudencia]

CON LA CUAL SE ACREDITA LA EXISTENCIA DE ACTOS DELIBERADOS DE CAMPAÑA POLITICA, tal como aconteció en el hecho aquí denunciado.

IV. La descripción de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que enlazadas entre sí, hagan verosímil la versión de los hechos denunciados. Tal condición ha sido ya revelada por el suscrito en el apartado que antecede y describe las circunstancias de modo, tiempo y lugar que van plena e innegable certeza de que los hechos denunciados acontecieron en la

realidad, ya que es incontroversial afirmar lo contrario con las pruebas indubitables ofrecidas.

V. Aportar los elementos de prueba, aun con carácter indiciario, con los que cuente el quejoso y soporten su aseveración, así como hacer mención de aquellas pruebas que no estén a su alcance, que se encuentren en poder de cualquier autoridad.

Igualmente ya fue realizado de mi parte, con total descripción de tales pruebas, su idoneidad y trascendencia.

VI. El carácter con que se ostenta el quejoso según lo dispuesto en el presente artículo.

Fue ya materia de pronunciamiento del suscrito, en el proemio de este escrito.

VII. Relacionar todas y cada una de las pruebas que ofrezca con cada uno de los hechos narrados en su escritorio inicial de queja o denuncia

Para efecto de este apartado, me limito a precisar que considero que cada prueba y su correlación con cada hecho denunciado quedo debidamente precisado y clarificado en su apartado respectivo.

(...)”

Pruebas ofrecidas y aportadas por el quejoso:

- 4 ligas URL en la que presuntamente se identifican los hechos denunciados.
- 5 videos en formato MP4 contenidos en disco compacto adjunto al escrito de queja.

III. Acuerdo de admisión e inicio del procedimiento de queja. El doce de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo por admitido el escrito de queja referido en el antecedente I, de la presente Resolución. En esa misma fecha se acordó, entre otras cuestiones, admitir a trámite y sustanciación el escrito de queja, notificar la admisión al Secretario del Consejo General de este Instituto y a la Consejera Electoral Presidenta de la Comisión de Fiscalización, así como emplazar a los sujetos denunciados (Fojas 10-11 del expediente).

IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión e inicio del procedimiento de queja.

- a) El doce de mayo de dos mil veintiuno, se fijó en el lugar que ocupan los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de admisión del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento (Foja 12 del expediente).
- b) El quince de mayo de dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan en este Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de inicio, la cédula de conocimiento, y mediante razones de publicación y retiro, se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente (Foja 13 del expediente).

V. Notificación de la admisión del procedimiento de queja al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El doce de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/21007/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización le informó al Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la admisión e inicio del procedimiento de mérito (Foja 14 del expediente).

VI. Notificación de la admisión del procedimiento de queja a la Consejera Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El doce de mayo de dos mil veintiuno, mediante el oficio INE/UTF/DRN/21008/2021 la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a la Presidenta de la Comisión de Fiscalización, la admisión e inicio del procedimiento de mérito (Foja 15 del expediente).

VII. Notificación de la admisión del escrito de queja y emplazamiento al C. José Julio González Landeros.

- a) Mediante acuerdo de doce de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Guanajuato, realizara lo conducente a efecto de notificar al C. José Julio González Landeros, la admisión del procedimiento administrativo sancionador de mérito y se le emplazó corriéndole traslado en medio magnético con las constancias que integran el expediente, a efecto que manifestara por escrito lo que a su derecho conviniera, así como para que ofreciera y exhibiera las pruebas que respaldaran sus afirmaciones (Fojas 18-21 del expediente).

**CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/253/2021/GTO**

- b) El treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/GTO/149/21, la Enlace de la Unidad Técnica de Fiscalización en el estado de Guanajuato remitió las cédulas de notificación del oficio INE/JLE-GTO /752/2021 (Fojas 22-56 del expediente).
- c) El dos de junio de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número el C. Daniel Reveles Ibarra, en su carácter de Representante de la Asociación Civil denominada “Una Carita Feliz, Libre e Independiente de Dolores Hidalgo”, dio respuesta al emplazamiento hecho de su conocimiento, mismo que, en su parte conducente, se transcribe a continuación: (Fojas 57-68 del expediente).

“(…)

Que estando en tiempo y forma legal, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 35, y 41 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, del Instituto Nacional Electoral, vengo a dar contestación a la denuncia o queja presentada por parte de Antonio Arredondo Aguilar, ostentándose como representante del Partido Acción Nacional contestación que se reduce a las siguientes expresiones:

POR CUANTO HACE AL CAPÍTULO DE ANTECEDENTES QUE SEÑALA EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN SU ESCRITO DE DENUNCIA, LOS CONTESTO EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

Único. - El texto que establece el denunciante como Antecedente ÚNICO en su denuncia, NO se afirma ni se niega, por no contener narración de hechos, y desde este momento se objeta el pretendido ofrecimiento de pruebas que hace el denunciante, toda vez que no las ofrece de manera formal, ni las relaciona con su narración del capítulo de Hechos, siendo que al presentar un DVD en el que supuestamente se contienen evidencias de las irregularidades que atribuye al candidato independiente José Julio González Landeros, es omiso en hacer una descripción minuciosa del contenido de los supuestos videos que hace del conocimiento de la autoridad, así como es omiso en hacer descripción detallada del contenido de las páginas de Internet que supuestamente son prueba de los hechos que califica de violatorios de la normatividad electoral en materia de fiscalización.

EN CUANTO AL CAPÍTULO DE HECHOS CONTENIDOS EN LA DENUNCIA PRESENTADA POR EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LOS CONTESTO DE LA SIGUIENTE MANERA:

PRIMERO. - Respecto al Hecho primero de la denuncia o queja, se niega tajantemente la supuesta violación a la normatividad electoral en materia de

fiscalización, puesto que el candidato independiente señalado, ha cumplido con las obligaciones precisadas en la normatividad, reportando los actos de campaña que ha realizado así como presentando los informes correspondientes a los gastos que con motivo de ello se han generado.

Ahora bien, el quejoso es omiso en acreditar los hechos que narra, es omiso en acreditar las supuestas violaciones a las normas que atribuye, por lo que nuevamente reitero que se objetan las supuestas pruebas que pretende ofrecer, pero que no ofrece de manera formal; siendo únicamente un disco versátil digital DVD cuyo contenido es omiso en describir, siendo que aun observando los contenidos, es indudable que no se acredita con los videos respectivos, las supuestas circunstancias de tiempo, modo y lugar en que dice se cometieron violaciones a la normatividad electoral, por tanto, se niega la procedencia de ninguna sanción dado que no existe certeza sobre las violaciones atribuidas al candidato independiente.

SEGUNDO. - En relación al Hecho segundo de la denuncia o queja, contesto que ES FALSO que José Julio González Landeros haya cometido violación alguna a las normas en materia de fiscalización, puesto que se reitera que todos los actos de campaña que ha realizado, han sido sujetos a las reglas vigentes y aplicables, así como se han realizado los reportes correspondientes y en su momento se presentarán los informes relativos a los gastos que se han generado con motivo de los actos de campaña, siendo que será oportuna la presentación del informe respectivo.

Ahora bien, resulta inverosímil e imposible que se haya cometido violación a la normatividad en materia de fiscalización, por una supuesta omisión de presentación de informe de gastos, toda vez que, como es de conocimiento de esta autoridad substanciadora, si la queja se presenta el día 7 de mayo, y en ella se describen hechos que según el quejoso ocurrieron dentro del mismo mes, es evidente que la presentación del informe de gastos deberá hacerse con posterioridad, una vez concluido el periodo de las campañas electorales, como lo marca precisamente la normatividad aplicable, por lo que evidentemente no se han cometido violaciones ningunas de las que infundadamente afirma el quejoso.

De igual manera, respecto del hecho segundo de la denuncia o queja, está claro que el quejoso es omiso en acreditar los hechos que narra, es omiso en acreditar las supuestas violaciones a las normas que atribuye, por lo que nuevamente reitero que se objetan las supuestas pruebas que pretende ofrecer, pero que no ofrece de manera formal; siendo únicamente un disco versátil digital DVD cuyo contenido es omiso en describir, siendo que aun observando los contenidos, es indudable que no se acredita con los videos respectivos, las supuestas circunstancias de tiempo, modo y lugar, no se

identifica a personas, ni se hace relación alguna a los mensajes o actos atribuidos, en que dice se cometieron violaciones a la normatividad electoral, por tanto, se niega la procedencia de ninguna sanción dado que no existe certeza sobre las violaciones atribuidas al candidato independiente.

Por ello, objeto en cuanto a su contenido, alcance y valor probatorio, todas y cada uno de los medios de prueba que ofrece y presenta la parte quejosa o denunciante.

. (...)”

VIII. Notificación de la admisión del procedimiento al quejoso. El trece de mayo de dos mil veintiuno, se notificó la admisión del procedimiento de queja a través de la Representación del Partido Acción Nacional ante el Consejo General de este Instituto, mediante el oficio INE/UTF/DRN/21009/2021 (Fojas 16-17 del expediente).

IX. Razones y Constancias.

- a) El veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo constar la consulta en el SIF con el propósito de verificar los registros contables relacionados con los conceptos de gastos denunciados. (Fojas 69-71 del expediente).
- b) El veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo constar la consulta de la Agenda de eventos reportada por el sujeto incoado en el SIF, a efecto de constatar el reporte en tiempo y forma de los eventos denunciados (Fojas 72-75 del expediente).
- c) El quince de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo constar la búsqueda de información en el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos (en adelante SIMEI), con el propósito de consultar las actas de eventos verificados por la Dirección de Auditoría en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Guanajuato. (Foja 103-105 del expediente).

X. Solicitud de verificación y certificación a la Dirección del Secretario de la Secretaría Ejecutiva en funciones de Oficialía Electoral (en lo subsecuente Oficialía Electoral).

- a) El veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, mediante el oficio INE/UTF/DRN/582/2021, la Dirección de Resoluciones y Normatividad de la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó a la Oficialía Electoral, verificara y certificara sobre la existencia, características, contenido y sujeto obligado beneficiado en las (4) ligas URL denunciadas, correspondientes a publicaciones realizadas en la red social denominada Facebook, y que presuntamente constituyen infracciones en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Guanajuato, remitiendo las documentales que contengan la certificación. (Fojas 76-78 del expediente).
- b) El treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio número INE/DS/1251/2021, la Directora del Secretariado informó sobre la recepción de la solicitud y su registro en el expediente INE/DS/OE/187/2021, asimismo remite en original el acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/210/2021, correspondiente a la certificación de (4) páginas de internet. (Fojas 79-93 del expediente).

XI. Requerimiento de información al C. José Julio González Landeros

- a) El catorce de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/29548/2021, se requirió al C. José Julio González Landeros, información relacionada con la agenda de eventos reportada en Sistema Integral de Fiscalización (en adelante SIF), así como conceptos de gasto identificados en registros contables que obran en el citado aplicativo y que son materia de investigación en el procedimiento al mérito. (Fojas 94-102 del expediente).
- b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, no se recibió respuesta de parte del C. José Julio González Landeros, al requerimiento de información realizado.

XII. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros (en adelante Dirección de Auditoría)

- a) El dieciséis de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/1019/2021, se solicitó a la Dirección de Auditoría, proporcionara

las actas que en el ejercicio de sus funciones se hubieren generado con motivo de la verificación de los eventos denunciados. (Fojas 106-112 del expediente).

- b) El quince de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DA2522/2021, la Dirección de Auditoría, proporcionó respuesta al oficio INEUTF/DRN/1019/2021, anexando un archivo en formato Excel con información relacionada con los hechos denunciados. (Fojas 129-131 del expediente).

XIII. Acuerdo de Alegatos.

- a) Mediante acuerdo de fecha doce de julio de dos mil veintiuno, se acordó abrir la etapa de alegatos en el procedimiento en que se actúa, así como la notificación de dicha etapa procesal a las partes, para efecto de que formularan por escrito los alegatos que consideraran convenientes. (Fojas 113-114 del expediente).
- b) El de catorce de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/34324/2021, se notificó al Representante de Finanzas del Partido Acción Nacional, para que en un plazo de setenta y dos horas, manifestara por escrito los alegatos que considerara convenientes. (Fojas 115-121 del expediente).
- c) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se recibió respuesta del Partido Acción Nacional al escrito formulado por esta autoridad.
- d) El de catorce de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio número INE/UTF/DRN/34325/2021, se notificó al C. José Julio González Landeros, para que en un plazo de setenta y dos horas, manifestara por escrito los alegatos que considerara convenientes. (Fojas 122-128 del expediente).
- e) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se recibió respuesta del C. José Julio González Landeros al escrito formulado por esta autoridad.

XIV. Cierre de Instrucción. El diecinueve de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente.

XV. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el

Proyecto de Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en la Décima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha veinte de julio de dos mil veintiuno, por unanimidad de votos de los integrantes presentes de la Comisión de Fiscalización, la Consejera Electoral Dra. Carla Astrid Humphrey Jordan, los Consejeros Electorales Dr. Uuc-Kib Espadas Ancona, Dr. Ciro Murayama Rendón, Dr. Jaime Rivera Velázquez y la Consejera Presidenta Dra. Adriana M. Favela Herrera.

En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del procedimiento de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente de conformidad con los artículos 192, numeral 1, inciso b) y numeral 2; 196, numeral 1, así como 199, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como 34, 37, 38 y 42 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización:

CONSIDERANDO

1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 199, numeral 1, incisos k) y o); 428, numeral 1, inciso g), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es **competente** para tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución.

Precisado lo anterior, y con fundamento en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 5, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.

En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, numeral 1; y 191, numeral 1, inciso g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que procedan.

2. Estudio de fondo. Que una vez fijada la competencia y no existiendo cuestiones de previo y especial pronunciamiento por resolver, habiendo analizado

los documentos y las actuaciones que integran el expediente en que se actúa, se desprende que el fondo del presente asunto se constriñe en determinar si el C. José Julio González Landeros, otrora candidato independiente a la Presidencia Municipal de Dolores Hidalgo C.I.N., en el estado de Guanajuato, omitió reportar eventos y gastos derivados de los mismos, en beneficio de su candidatura, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Guanajuato.

En consecuencia, debe determinarse si el sujeto incoado incumplió con lo dispuesto en los artículos 25, numeral 1, incisos i) y n), 54, numeral 1, 79, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos; 96, numeral 1, 121 y 127, numerales 1 a 3, y 143 Quater del Reglamento de Fiscalización, mismos que se transcriben a continuación:

Ley General de Partidos Políticos

“Artículo 25.

*1. Son obligaciones de los partidos políticos
(...)*

i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las personas a las que las leyes prohíban financiar a los partidos políticos;

(...)

n) Aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines que les hayan sido entregados;”

“Artículo 54.

1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los aspirantes precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia:

a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento público establecido en la Constitución y esta Ley;

- b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública Federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de gobierno del Distrito Federal;*
- c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal;*
- d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras;*
- e) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza;*
- f) Las personas morales, y*
- g) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero.”*

“Artículo 79.

1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas siguientes:

(...)

b) Informes de Campaña:

I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente;

II. El candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos que se refieren en el inciso anterior, y

III. Los partidos políticos presentarán informes de ingresos y gastos por periodos de treinta días contados a partir de que dé inicio la etapa de campaña, los cuales deberán entregar a la Unidad Técnica dentro de los siguientes tres días concluido cada periodo.”

Reglamento de Fiscalización

“Artículo 96.

Control de los ingresos

1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de

financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes en la materia y el Reglamento.”

“Artículo 121.

Entes impedidos para realizar aportaciones

1. Los sujetos obligados deben rechazar aportaciones o donativos, en dinero o

en especie, préstamos, donaciones, condonaciones de deuda, bonificaciones, descuentos, prestación de servicios o entrega de bienes a título gratuito o en comodato de los siguientes:

a) Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades, así como los ayuntamientos.

b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública Federal, estatal o municipal, así como los del Distrito Federal.

c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal.

d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras.

e) Las organizaciones gremiales, sindicatos y corporativos.

f) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza.

g) Los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión.

h) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero.

i) Las empresas mexicanas de carácter mercantil.

j) Las personas morales.

k) Las organizaciones sociales o adherentes que cada partido declare, nuevas o previamente registradas.

l) Personas no identificadas.”

“Artículo 127.

Documentación de los egresos

1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.

2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.

3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado, en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea. Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento.”

“Artículo 143 Quater.

Prohibición de gastos durante las precampañas y campañas

1. Durante los procesos electorales, los partidos políticos, los aspirantes, los precandidatos, candidatos independientes y los candidatos están impedidos para entregar por sí o por interpósita persona, cualquier tarjeta, volante, díptico, tríptico, plástico o cualquier otro documento o material en el que se oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o efectivo, a través de cualquier sistema que implique la entrega de un bien o servicio, así como solicitar a los ciudadanos cualquier dato personal a cambio de dicho beneficio.

(...)”

De las premisas normativas citadas se desprende que los sujetos obligados tienen diversas responsabilidades, entre ellas, la de conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su actuar a los principios del Estado democrático, garantizando de esa forma el principio de respeto absoluto de la norma. Así pues, con esta finalidad se ha establecido a los partidos políticos, aspirantes y candidatos independientes, la obligación de presentar ante el órgano fiscalizador, registros contables e informes en los cuales se reporte el origen y el monto de los ingresos y egresos del ejercicio correspondiente, así como el respetar todas las reglas que establece la normatividad de la materia para su origen, monto, destino y aplicación.

Lo anterior, permite al órgano fiscalizador contar con toda la documentación comprobatoria necesaria para ejercer sus facultades de comprobación, para verificar el adecuado manejo de los recursos y a su vez tener certeza de la licitud de sus operaciones; esto es, se garantiza la existencia de un régimen de legalidad, transparencia y rendición de cuentas, principios esenciales que deben regir en un Estado democrático.

En ese sentido, los referidos preceptos normativos, tutelan los principios rectores de la fiscalización, tales como son la legalidad, equidad, transparencia e imparcialidad, pues los institutos políticos deben buscar cumplir con las reglas que la contienda electoral conlleva, esto con la finalidad de que esta se desarrolle dentro del marco normativo, pues, su vulneración implicaría una transgresión directa a la norma electoral.

De lo antes señalado, se desprende que los entes políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, el registro contable de las operaciones inherentes a la realización de eventos de campaña, así como dar aviso oportuno a la autoridad a través del SIF, acompañando la totalidad de la documentación soporte, considerando los requisitos y plazos establecidos por la normativa electoral; ello tiene como finalidad, facilitar el cumplimiento de sus obligaciones mediante la implementación de instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas y brinden claridad y certeza respecto de las operaciones vinculadas con la difusión de dicha propaganda.

En este tenor, es posible concluir que la inobservancia de la normatividad referida, vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, en tanto, es deber de los sujetos obligados informar en tiempo y forma los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar, debiendo proporcionar la documentación soporte requerida, a efecto de otorgar una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.

Dicho lo anterior, es evidente que la normatividad en comento, dispone diversas reglas concernientes a obtención de recursos a través de fuentes lícitas, así como a la debida erogación y rendición de cuentas con motivo de la realización de eventos en los procesos electorales, al establecer que los ingresos y egresos relacionados en este tenor deberán ser reportados en tiempo y forma a través del

SIF y que de manera adicional en el mismo aplicativo se deberán registrar en los catálogos auxiliares, de eventos en el caso que ocupa, atendiendo a los plazos establecidos por la normativa aplicable.

De este modo, y derivado de las atribuciones constitucionales y legales, el órgano fiscalizador emprende procedimientos accesorios de revisión, comprobación e investigación, que tienen por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los sujetos obligados; así como el cumplimiento de éstos de las diversas obligaciones que en materia de financiamiento y gasto les impone la normativa de la materia y, en su caso, que este Consejo General determine, de conformidad con la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Reglamento de Fiscalización y demás disposiciones aplicables.

Nos referimos pues, a procedimientos accesorios que de manera enunciativa consisten en los siguientes:

1. Monitoreos.

- Espectaculares.
- Medios impresos.
- Internet.
- Cine.

2. Visitas de verificación.

- Casas de campaña.
- Eventos Públicos.
- Recorridos.

Como se ha mencionado, dichos procedimientos tienen como finalidad el verificar la veracidad de lo reportado por los sujetos obligados, de modo que, posterior a la realización de procedimiento accesorio alguno, se procede a cotejar los registros contables del sujeto beneficiado, y en caso de no lograr la plena conciliación entre los hallazgos asentados en dichos procedimientos y los registros contables efectuados en tiempo real por el obligado, se procede al acto de reproche.

En otras palabras, aquellos conceptos no conciliados se vuelven parte integrante del acto de reproche idóneo, esto es, del oficio de errores y omisiones a través del cual se le hace del conocimiento al sujeto obligado el cúmulo de inconsistencias u

omisiones advertidas en la revisión de los informes presentados en consonancia con las demás aristas que constituyen el proceso global de fiscalización.

Es así que, seguidas las etapas de fiscalización, el sujeto obligado encuentra la oportunidad de manifestar las aclaraciones que considere procedentes e incluso de realizar los registros complementarios correspondientes, para así, a través de estas vías solventar las observaciones reprochadas.

Es importante considerar que, las visitas de verificación constituyen un mecanismo previsto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en el Reglamento de Fiscalización, que le permite a la autoridad fiscalizadora verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normatividad vigente respecto a la veracidad de lo reportado en los Informes de los Ingresos y Gastos que realicen los sujetos obligados en el periodo de campaña; pues se trata de una herramienta diseñada para contrastar y corroborar la información recabada por el personal designado por la Unidad Técnica de Fiscalización, para la realización de las verificaciones, con lo reportado por los sujetos obligados.

De igual manera, las visitas de verificación son una actividad eficaz de la autoridad fiscalizadora para auxiliar y coadyuvar en las funciones de control y vigilancia respecto de los informes de Campaña que presenten los sujetos obligados, a efecto de cotejar que todos los gastos realizados hayan sido debidamente registrados en su contabilidad y reportados en los Informes correspondientes, garantizando así la certeza y transparencia en el origen de los recursos.

Como se advierte, las visitas de verificación permiten a la Unidad Técnica de Fiscalización tener mayor certeza respecto al cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en materia de financiamiento y gasto, no obstante el volumen de actividades a verificar queda sujeto al criterio establecido en el alcance de los procedimientos de fiscalización definidos por la autoridad en la revisión a la información y documentación de los sujetos obligados.

En esta tesitura, lo que se pretende con la norma es contribuir a dotar de un registro a la autoridad electoral para que pueda tener una mayor certeza y control al rehuir el fraude a la ley, mismo que se configura al momento en el que los sujetos obligados respetan las palabras de la ley, pero eluden su sentido. Lo anterior conlleva a que, para cumplir cabalmente con el objeto de la ley, y constatar que el bien jurídico tutelado por esta norma se verifique íntegramente,

no basta la interpretación gramatical de los preceptos normativos en comento, sino que se debe interpretar el sentido de la norma desde un punto de vista sistemático, lo cual supone no analizar aisladamente el precepto cuestionado, pues cada artículo se encuentra complementado por otro o bien por todo el conjunto de ellos, lo cual le da un alcance de mayor amplitud, complejidad y coherencia al ordenamiento legal.

Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque los sujetos obligados son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional, y hacer posible el acceso de la ciudadanía al ejercicio del poder público, de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización originan una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado.

Coligiendo todo lo anterior, se puede concluir que los preceptos jurídicos en comento, establecen directamente la obligación de los sujetos obligados de reportar a la autoridad electoral la realización de eventos en los procesos de campaña, así como los ingresos y/o gastos inherentes a su realización, a través del SIF.

Ahora bien, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de prueba que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la experiencia, las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral.

En ese sentido, previo a realizar un pronunciamiento respecto de los elementos de prueba obtenidos en el procedimiento en que se actúa, resulta conveniente entrar al estudio de lo manifestado por el quejoso. Primeramente, conviene señalar que el promovente aduce la realización de tres eventos, con las siguientes características y conceptos de gastos denunciados:

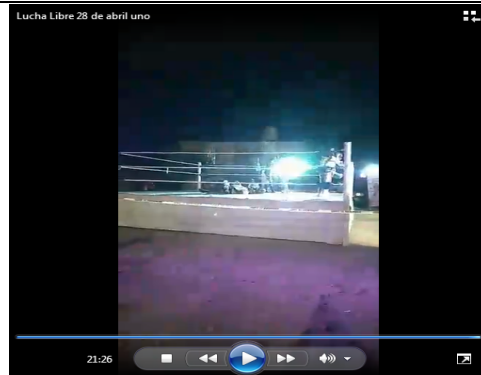
Fecha y hora del evento	Ubicación del evento	Concepto de gastos denunciados
28/04/2021 21:05 hrs.	"Parque La Carolina", ubicado entre las calles Encino, Nogal y Buganvilias, Col.	1. Espectáculo de lucha libre. 2. Pirotecnia.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/253/2021/GTO

Fecha y hora del evento	Ubicación del evento	Concepto de gastos denunciados
	San Agustín, Dolores Hidalgo, C.I.N., Guanajuato.	<ol style="list-style-type: none"> 3. Mojigangas. 4. Equipo de sonido profesional. 5. Maestro de ceremonias. 6. Colocación y reparto de publicidad.
05/05/2021 16:50 hrs.	Calzada de los Héroes, partiendo del Monumento a los Héroes de la Independencia, hasta el Monumento a la Bandera, ubicado en la Avenida Guanajuato, esquina con Calle Quintana Roo, Zona Centro, Dolores Hidalgo C.I.N., Guanajuato.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Grupo musical "Banda de Viento o Banda Sinaloense". 2. Mojigangas. 3. Equipo de sonido profesional. 4. Maestro de ceremonias. 5. Colocación y reparto de publicidad.
05/05/2021 21:25 hrs.	Espacio público ubicado en Calle Corregidora, esquina con Calle Campeche, Zona Centro, Dolores Hidalgo C.I.N., Guanajuato.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Espectáculo de lucha libre. 2. Pirotecnia. 3. Mojigangas. 4. Equipo de sonido profesional. 5. Maestro de ceremonias. Colocación y reparto de publicidad.

Para acreditar su pretensión presentó en disco compacto adjunto al escrito de queja, cinco archivos de video en formato MP4, de los que se advierten las siguientes imágenes, correspondientes a las partes inicial, media y final de cada video:

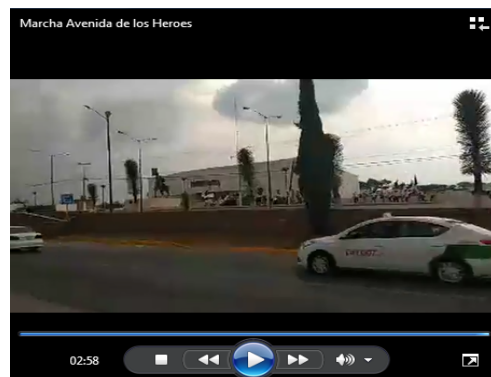




Video 2. Denominado “Licha Libre 28 de abril dos”



Video 3. Denominado “Marcha Avenida de los Heroes”

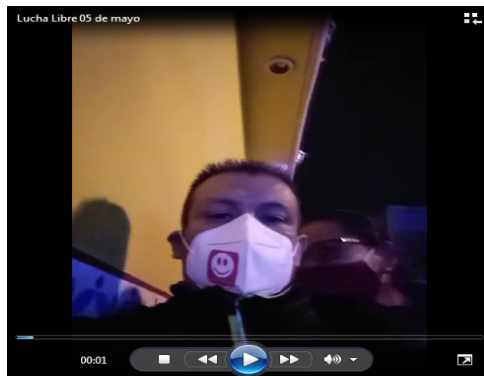


Video 4. Denominado "Banda Musical frente a presidencia"





Video 5. Denominado “Lucha Libre 05 de mayo”



Dichos elementos constituyen una prueba técnica que de conformidad con el artículo 17, numeral 1, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, tienen un valor

indiciario y harán prueba plena, siempre que a juicio de este Consejo General generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.

En virtud de lo anterior, éstas resultan insuficientes para tener por probados plenamente los hechos denunciados, ya que de las mismas no se desprenden mayores elementos que vinculen su contenido con un presunto beneficio en favor del candidato y/o de los institutos políticos denunciados que permitieran a esta autoridad determinar la existencia de conductas que vulneren disposiciones en materia de fiscalización; aunado a ello, es oportuno señalar que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado que las imágenes (en este caso contenidas en un archivo audiovisual) como medio de prueba son susceptibles de ser manipuladas, por lo que resulta un medio probatorio limitado.

En este sentido, atendiendo a la naturaleza de las pruebas técnicas, se requiere de una descripción detallada de lo que se aprecia en la prueba, con la finalidad de fijarle el valor convictivo correspondiente y es necesario que el oferente establezca una relación con los hechos que se pretende acreditar, precisando las circunstancias que pretenden ser probadas.

A mayor abundamiento, sirve como criterio orientador lo referido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 36/2014, mediante el cual estableció que las pruebas técnicas por su naturaleza requieren la descripción precisa de los hechos y circunstancias que se pretenden demostrar con ellas; ello en virtud que la normatividad electoral las define como las fotografías, otros medios de reproducción de imágenes y, en general, todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos o instrumentos, accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance de la autoridad electoral, por consiguiente la carga para el aportante es la de señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando a personas, lugares, así como las circunstancias de modo y tiempo y lugar que reproduce la prueba, esto es, realizar una descripción detallada de lo que se aprecia en la reproducción de la prueba técnica, a fin de que la autoridad esté en condiciones de vincular la citada prueba con los hechos que pretende acreditar, con la finalidad de aportar el valor de convicción correspondiente.

Por consiguiente, las pruebas técnicas en las que se reproducen imágenes (como sucede con las videograbaciones presentadas por el denunciante), deben tener la descripción clara y detallada de lo que contienen, las circunstancias de modo, tiempo y lugar que acontece en cada una de ellas y deben guardar relación con los hechos que pretenden acreditar, por lo que el grado de precisión en la descripción debe ser proporcional a las circunstancias que se pretenden probar.

Consecuentemente, si lo que se requiere demostrar son actos específicos imputados a una persona, el promovente debería describir la conducta asumida por el denunciado y que señala está contenida en las pruebas técnicas; y para el caso de aquellos hechos en los que pretende acreditar y que atribuye a un número indeterminado de personas, debería ponderar racionalmente la exigencia de la identificación individual, atendiendo al número de involucrados en relación al hecho que se pretende acreditar con éstas.

En relación a lo anterior, la jurisprudencia 4/2014 emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala que las pruebas técnicas son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; toda vez que dada su naturaleza, tienen un carácter imperfecto debido a la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido; de ahí que resulte necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser administradas, que las puedan corroborar o perfeccionar la veracidad y existencia de los hechos que se pretenden acreditar con éstas.

En este sentido, las referidas pruebas técnicas aportadas por el quejoso no resultan aptas de manera aislada para considerar acreditados los hechos denunciados, sino solo un simple indicio, por lo que se deben corroborar con otros medios de convicción, de los que deriven mayores elementos que se encuentren debidamente relacionados con la información aportada y así la autoridad pueda verificar que los hechos puestos a su consideración efectivamente ocurrieron en la forma y tiempo descritos por el quejoso.

De este modo, iniciado el procedimiento de mérito, se emplazó al C. José Julio González Landeros, quien en ejercicio de su derecho de audiencia manifestó¹ a

¹ La información remitida por la Asociación Civil en representación del otrora candidato independiente constituyen documentales privadas que de conformidad con el artículo 16, numeral 2, en relación con el artículo 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, sólo harán prueba plena siempre que a juicio de este Consejo General generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás

través del C. Daniel Reveles Ibarra, Representante de la Asociación Civil denominada “Una Carita Feliz, Libre e Independiente de Dolores Hidalgo”, medularmente lo que se señala a continuación:

- Negó tajantemente la supuesta violación a la normatividad electoral en materia de fiscalización, señalando que el candidato independiente ha cumplido a cabalidad con las obligaciones contraídas, en materia de reporte de actos de campaña.
- Que el quejoso es omiso en describir las circunstancias de tiempo, modo y lugar respecto del contenido de las pruebas técnicas proporcionadas mediante las videgrabaciones contenidas en disco compacto.

Ahora bien, a efecto de contar con información y documentación que le permitiera a la autoridad instructora tener certeza respecto de los hechos denunciados, se solicitó el apoyo de la Oficialía Electoral, a efecto de que verificara y certificara la existencia, características, contenido y sujeto obligado beneficiado en las 4 ligas URL denunciadas, consistentes en publicaciones realizadas a través de la red social denominada Facebook.

En respuesta a lo solicitado, la Oficialía Electoral mediante acta circunstanciada hizo constar la verificación realizada, en la cual da cuenta de la existencia de 3 publicaciones en la red social Facebook, realizadas a través de los usuarios “Armando Jimenez”, “Tv Independencia” y “José Julio González Landeros”, así como de la imposibilidad de ingresar a 1 de las ligas URL denunciadas. La Oficialía Electoral proporcionó el detalle de la metodología empleada en el procedimiento de verificación y certificación, así como muestras fotográficas de su actuar, mismas que se proporcionan a continuación

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/253/2021/GTO

Liga:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=828321757792235&id=100018432548359&sfnsn=scwspwa

INICIO DEL VIDEO	PARTE MEDIA DEL VIDEO	FIN DEL VIDEO
 (00:00:00)	 (00:02:10)	 (00:04:16)

Liga:
<https://www.facebook.com/TvIndependenciaGrupoTelevisivoGuanajuato/videos/317221273088438/>

INICIO DEL VIDEO	PARTE MEDIA DEL VIDEO	FIN DEL VIDEO
 (00:00:00)	 (00:01:40)	 (00:04:16)

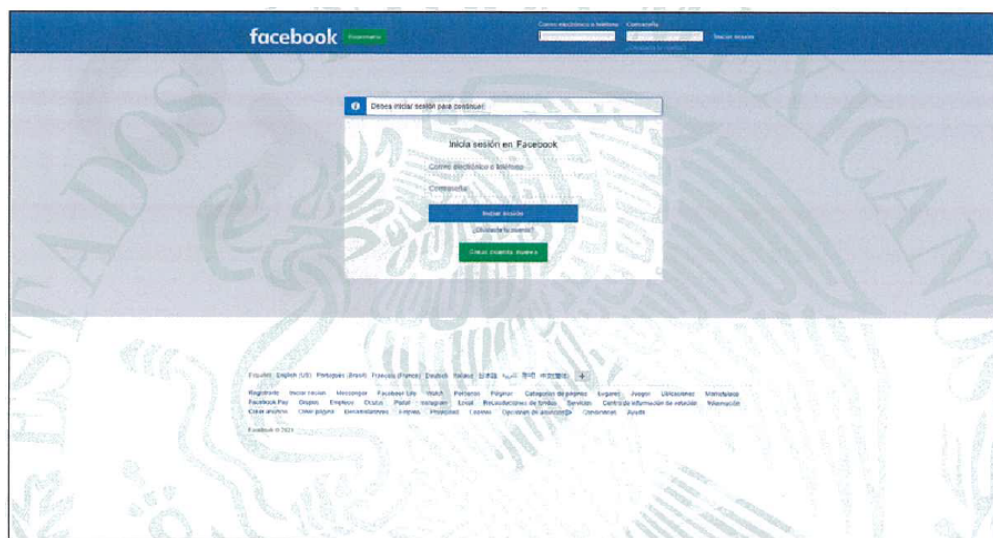
Liga: <https://www.facebook.com/JJulioGonzalez/videos/788668695369604/>

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/253/2021/GTO

Liga:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=828321757792235&id=100018432548359&sfnsn=scwspwa

INICIO DEL VIDEO	PARTE MEDIA DEL VIDEO	FIN DEL VIDEO
 <p>(00:00:00)</p>	 <p>(00:07:20)</p>	 <p>(00:15:16)</p>

Liga:
<https://www.facebook.com/100061353204408/videos/157113803010392/?sfnsn=scwspwa>



Debe señalarse que, la información y documentación remitida por la Oficialía en comento, constituye una documental pública en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I en relación al 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón por la cual la misma tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados. Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad competente en ejercicio de sus funciones.

Ahora bien, continuando con la investigación, esta autoridad electoral procedió a realizar una consulta² al catálogo auxiliar “Agenda de eventos” en el SIF, en la que fue posible identificar dos eventos reportados por el C. José Julio González Landeros en el SIF, dentro de los plazos establecidos por la normatividad en materia de fiscalización, mismos que corresponden con las características de tiempo, modo y lugar de los eventos denunciados por el quejoso y que se señalan a continuación:

ID evento	Nombre	Fecha	Hora inicio	Hora fin
00065	Recorrido del candidato	28/04/2021	21:00 horas	22:30 horas
00073	Presentación de propuesta de trabajo	05/05/2021	16:00 horas	22:00 horas

Asimismo, esta autoridad, a fin de contar con mayores elementos, procedió a realizar una búsqueda dentro del SIMEI, de la cual se elaboró razón y constancia, misma que obra en expediente³, lo anterior con el propósito de obtener información relacionada con eventos verificados en la entidad de Guanajuato, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, no obstante en el citado aplicativo no fue posible identificar registros relacionados con eventos del C. José Julio González Landeros.

Derivado de lo anterior y en aras de agotar el principio de exhaustividad, se solicitó a la Dirección de Auditoría, proporcionara las actas de verificación que en el ejercicio de sus funciones como autoridad fiscalizadora, hubiere levantado con motivo de la verificación de los eventos denunciados. En ese sentido la Dirección de Auditoría proporcionó mediante archivo en formato Excel, el detalle del análisis

² En este sentido la información obtenida por esta autoridad del Sistema Integral de Fiscalización y agregada a los autos mediante razón y constancia constituye una documental pública en términos de lo previsto en el artículo 20, numeral 4, en relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón por la cual tienen valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados.

³ En este sentido la información obtenida por esta autoridad del Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos y agregada a los autos mediante razón y constancia constituye una documental pública en términos de lo previsto en el artículo 20, numeral 4, en relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón por la cual tienen valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados.

a los conceptos de gastos denunciados, los cuales confirmó se encuentran debidamente reportados y comprobados en tiempo y forma por el sujeto incoado en el SIF.

De lo anteriormente expuesto, **se advierte el reporte de los eventos denunciados por el quejoso, mismos que se encuentran registrados en el Sistema Integral de Fiscalización**; ahora bien, no pasa desapercibido que, con la aprobación del Dictamen Consolidado se determinarán las irregularidades que se detecten durante la revisión del informe de campaña del sujeto obligado, por lo que en su caso, si se actualizara alguna vulneración en materia de registro en relación al evento materia de análisis, ésta será sancionada en la Resolución que en su momento emita este Consejo General.

Establecido lo anterior, en atención a las manifestaciones vertidas por el promovente, esta autoridad procederá a determinar si existieron gastos no reportados derivados de la realización de los eventos denunciados.

Ahora bien, a efecto de efectuar un pronunciamiento individualizado, respecto de los conceptos de gasto denunciados por el quejoso, este Consejo General por cuestiones de método analizará los hechos denunciados en los siguientes apartados:

- a) Gastos denunciados encontrados en el SIF.**
- b) Gastos que se tienen por no acreditados.**

a) Gastos denunciados encontrados en el SIF.

El quejoso denuncia que derivado de los actos de campaña (eventos) el C. José Julio González Landeros fue omiso en reportar gastos, tales como pirotecnia, mojigangas, equipo de sonido, maestro de ceremonias, entre otros.

En ese sentido, se realizó una búsqueda en el SIF, a efecto de verificar si dentro de dicho sistema de contabilidad en línea se detectaba el registro los eventos de campaña y los conceptos de gastos denunciados, actuación que se hizo constar en las razones y constancias elaboradas y posteriormente integradas al expediente.⁴

⁴ En este sentido la información obtenida por esta autoridad del Sistema Integral de Fiscalización y agregada a los autos mediante razón y constancia constituye una documental pública en términos de lo previsto en el artículo 20, numeral 4, en relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón por la cual tienen valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/253/2021/GTO

Derivado del análisis efectuado a las pólizas registradas, se tuvo conocimiento de que en efecto, existe en la contabilidad número 78263 del SIF, asignada al otrora candidato independiente a la Presidencia Municipal de Dolores Hidalgo C.I.N., en el estado de Guanajuato, el C. José Julio González Landeros; el registro contable y documentación que presuntamente amparan las operaciones realizadas por los conceptos denunciados tales como pirotecnia, gorras, playeras, cubrebocas, banderas, banderines, lonas, mantas, etiquetas, equipo de audio e iluminación, luces artificiales, banda de viento y ring de lucha, mismos que se detalla a continuación:

No. Póliza	Tipo	Subtipo	Periodo	Concepto
5	Normal	Diario	1	Gorras
2 y 3		Egresos	2	
6		Diario	1	Playeras estampadas
2 y 3		Egresos	2	
21		Diario		
7 y 9		Diario	1	Banderas y banderines
2		Egresos	2	
18		Diario	2	Pirotecnia
8		Diario	1	Ring
7		Diario	2	
10		Diario	1	Lonas
4		Egresos		
20		Diario	2	
1		Egresos		
11		Diario	1	Cubrebocas
20		Diario	1	Luces artificiales
2	Corrección	Diario	2	
9 y 22	Normal	Diario	1	Audio e iluminación
1		Diario	2	Banda de viento
1		Egresos	2	Mantas y etiquetas

En este sentido, es importante señalar que los gastos reportados son coincidentes con los denunciados por el quejoso.

En ese sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en diversas sentencias ha establecido criterios orientadores⁵ relacionados en comento, señalando entre otras cuestiones:

⁵ De conformidad con los criterios sostenidos al resolver los expedientes SUP-REP-168/2015 y su acumulado, SUP-REP-233/2015 y su acumulado, así como el SUP-RAP-160/2015.

- Que el internet es una red informática mundial, que trasciende como un mecanismo para que cualquier persona pueda difundir y acceder a información de su interés, y su utilización permite la descentralización extrema de la información; por ello y debido a su rápida masificación en el espacio virtual, puede reproducirse con facilidad, especialmente tratándose de redes sociales, en las que sus usuarios intercambian información y contenidos (textos, imágenes, archivos, vínculos a otras páginas, entre otros), de modo que crean una comunidad virtual e interactiva.
- Que derivado de la naturaleza de las redes sociales y las características aludidas, las publicaciones carecen de un control efectivo respecto de la autoría y de los contenidos que allí se exteriorizan.
- Que las redes sociales constituyen un espacio creado para intercambiar información entre los usuarios de esas plataformas en cualquier parte del mundo, donde además la comunicación se genera entre un gran número de usuarios que suben y bajan la información ahí difundida.
- Que atendiendo a la forma en que opera el internet, se puede colegir que existen grandes vacíos e impedimentos para que sus usuarios puedan ser identificados, así como una gran dificultad para establecer de manera fehaciente, la fuente de su creación, y en consecuencia, ello imposibilita el poder atribuir a un ente o sujeto la responsabilidad del contenido respectivo.

En ese mismo orden de ideas, la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido que la Legislación Electoral mexicana vigente carece de regulación del tema relativo al uso de redes sociales y páginas de internet; en específico, como espacios para la difusión de cualquier tipo de propaganda, ya sea electoral o gubernamental, en el contexto del desarrollo del debate político y el acceso a la información por parte de la ciudadanía⁶. Así pues, mientras que algunos medios de comunicación (como la radio, la televisión y los medios impresos) tienen un marco normativo definido a nivel constitucional y legal, la situación de Internet, en específico las redes sociales carecen de un escenario de regulación normativo.

⁶ Criterio sostenido en las sentencias identificadas con los números de expediente SRE-PSC- 268/2015 y SRE-PSC-3/2016, mediante la cual dicho órgano jurisdiccional resolvió el caso bajo un nuevo método de análisis, que parte de la naturaleza y alcances de este tipo de plataformas, en el contexto del ejercicio del derecho fundamental de libertad de expresión y el margen reducido de las restricciones que son susceptibles de imponerse, y no partió del contenido, temporalidad o personas involucradas, esto es, el análisis debe realizarse a partir de la naturaleza de la red social Facebook, al considerar que en un ejercicio de ponderación debe prevalecer la tutelada del ejercicio de la libertad de expresión.

En efecto, en Internet existen plataformas electrónicas que se han convertido en espacios virtuales en los cuales, los usuarios pueden registrarse libremente para ver y compartir diversos contenidos tales como videos, fotografías, artículos, documentos, e información en general sin que pueda identificarse por quien fueron creados originalmente, ni verificarse la veracidad de los mismos.

Por consiguiente, la información obtenida de redes sociales y/o páginas de internet, es insuficiente por sí sola, para acreditar la existencia de los hechos denunciados, tomando en consideración que la queja de mérito refiere como circunstancias de tiempo, modo y lugar las contenidas en la página en cuestión.

Como se observa, el quejoso hace propios los hechos que se visualizan en la página de internet para cumplir con el supuesto establecido en el artículo 29, numeral 1, fracción IV del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización y por otra parte en cuanto al caudal probatorio, relaciona la existencia de los hechos que ahí se observan, ya sea por la certificación que realiza la autoridad de la liga de internet que dirige el vínculo a la red social o por haber presentado de forma física o digital el contenido de la liga de internet relacionada.

Considerando los párrafos precedentes, ofrecer como medio de prueba el contenido de redes sociales y/o páginas de internet en procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización, tiene como premisa el alcance que origina una prueba técnica⁷, toda vez que del contenido mismo se desprende la existencia de imágenes o en su caso de videos, los cuales son insuficientes por si solas para acreditar la existencia de los que se pretende demostrar y en su caso, para fincar responsabilidades a los sujetos incoados; por lo que las mismas deben de ser perfeccionadas con elementos de prueba adicionales

Sirven para reforzar lo anterior, el siguiente criterio orientador establecido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación:

Jurisprudencia 4/2014

PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.- De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución

⁷ De conformidad con lo establecido en el artículo 17, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización.

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que toda persona tiene derecho a un debido proceso, para lo cual se han establecido formalidades esenciales, y que en los medios de impugnación previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas tienen carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser administradas, que las puedan perfeccionar o corroborar.

Quinta Época:

Juicio de revisión constitucional electoral. [SUP-JRC-041/99](#).—Actor: Coalición integrada por los Partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Revolucionario de las y los Trabajadores.—Autoridad responsable: Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero.—30 de marzo de 1999.—Unanimidad de votos.—Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata.—Secretario: Juan Manuel Sánchez Macías.

Juicio de revisión constitucional electoral. [SUP-JRC-050/2003](#).—Actor: Partido Acción Nacional.—Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Estado de México.—30 de abril de 2003.—Unanimidad de cinco votos.—Ponente: José Luis de la Peza.—Secretario: Felipe de la Mata Pizaña.

Recurso de apelación. [SUP-RAP-64/2007](#) y acumulado.—Recurrentes: Partido Verde Ecologista de México y otro.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—21 de septiembre de 2007.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Secretario: Fidel Quiñones Rodríguez.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintiséis de marzo de dos mil catorce, aprobó por mayoría de cuatro votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria

De lo anterior, y una vez que el quejoso no aportó mayores elementos que pudieran llevar a esta autoridad a acreditar de que se tratan de gastos de campaña no reportados, se concluye que los conceptos fueron reportados en la contabilidad correspondiente al C. José Julio González Landeros, pues como ya se manifestó, el quejoso únicamente aportó pruebas técnicas como soporte a sus

afirmaciones, sin embargo, no presentó algún otro elemento que permitiera vincular los hechos denunciados.

b) Gastos que se tienen por no acreditados.

Del análisis al escrito presentado y derivado del análisis a la contabilidad del sujeto incoado en el SIF, se advierte que los conceptos de gastos denunciados quedaron acreditados y vinculados a los registros contables del entonces candidato, a excepción del gasto por concepto de **maestro de ceremonias**, del cual en la contabilidad número 78263 del SIF no fue posible identificar gasto alguno relacionado y de las pruebas aportadas no es posible confirmar la existencia del gasto denunciado.

Ahora bien, es importante señalar que si bien, que de la revisión a los videos aportados por el quejoso como prueba en su escrito inicial de queja, es posible identificar diversos elementos relativos a la realización de un evento, no obstante al tratarse de pruebas técnicas no es posible vincular con certeza la totalidad de los conceptos de gasto y que estos hayan representado erogaciones a cargo del sujeto incoado, por lo que esta autoridad considera que ante la duda razonable sobre el particular, debe aplicarse a favor de los incoados el principio jurídico “*in dubio pro reo*”, reconocido por el derecho administrativo sancionador en materia electoral.

A mayor abundamiento, resulta aplicable el criterio vertido en la siguiente Jurisprudencia:

DUDA ABSOLUTORIA. ALCANCE DEL PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO. El aforismo ‘*in dubio pro reo*’ no tiene más alcance que el consistente en que en ausencia de prueba plena debe absolverse al acusado. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Parte: 75, marzo de 1994. Tesis: VII. P. J/37. Página: 63.

Asimismo, sirve como sustento de la aplicabilidad del principio de “*in dubio pro reo*”, dentro de los procedimientos administrativos, la tesis siguiente:

DUDA SOBRE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. APLICACIÓN DEL PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO. MULTAS. Al no ser razonable que una infracción se haya cometido, tratándose de multas por violación a las disposiciones administrativas legales, resulta aplicable el principio jurídico *in dubio pro reo*. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente:

Semanario Judicial de la Federación. Parte: 33 Sexta. Parte Tesis: Página: 24.

También resultan aplicables las siguientes tesis relevantes identificadas con las claves LIX/2001 y XVII/2005, respectivamente, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo y rubro y texto son al tenor siguiente:

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRINCIPIO VIGENTE EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.- De la interpretación de los artículos 14, apartado 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8o., apartado 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos ratificados por nuestro país en términos del 133 de la Constitución federal, aplicados conforme al numeral 23, párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que el principio de presunción de inocencia que informa al sistema normativo mexicano, se vulnera con la emisión de una Resolución condenatoria o sancionatoria, sin que se demuestren suficiente y fehacientemente los hechos con los cuales se pretenda acreditar el supuesto incumplimiento a las disposiciones previstas en las legislaciones. Lo anterior en razón de que dicha presunción jurídica se traduce en un derecho subjetivo de los gobernados a ser considerados inocentes de cualquier delito o infracción jurídica, mientras no se presente prueba bastante que acredite lo contrario, en el entendido que, como principio de todo Estado constitucional y democrático de derecho, como el nuestro, extiende su ámbito de aplicación no sólo al ámbito del proceso penal sino también cualquier Resolución, tanto administrativa como jurisdiccional, con inclusión, por ende, de la electoral, y de cuya apreciación se derive un resultado sancionatorio o limitativo de los derechos del gobernado.

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. SU NATURALEZA Y ALCANCE EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.- La presunción de inocencia es una garantía del acusado de una infracción administrativa, de la cual se genera el derecho a ser tenido y tratado como inocente mientras no se pruebe lo contrario, y tiene por objeto evitar que las autoridades jurisdiccionales o administrativas, con la detentación del poder, involucren fácilmente a los gobernados en procedimientos sancionatorios, con elementos simples y sin fundamento en un juicio razonable sobre su autoría o participación en los hechos imputados. A través de esta garantía se exige, que las autoridades sancionadoras reciban o recaben pruebas idóneas, aptas y suficientes, con respeto irrestricto de todas las formalidades y requisitos del debido proceso legal, sin afectación no autorizada de los derechos fundamentales, y mediante investigaciones exhaustivas y serias, dirigidas a

conocer la verdad objetiva de los hechos denunciados y de los relacionados con ellos, respecto al objeto de la investigación, mientras no se cuente con los elementos con grado suficiente de convicción sobre la autoría o participación en los mismos del indiciado, para lo cual deberán realizarse todas las diligencias previsibles ordinariamente a su alcance, con atención a las reglas de la lógica y a las máximas de experiencia, dentro de la situación cultural y de aptitud media requerida para ocupar el cargo desempeñado por la autoridad investigadora, y que esto se haga a través de medios adecuados, con los cuales se agoten las posibilidades racionales de la investigación, de modo que, mientras la autoridad sancionadora no realice todas las diligencias necesarias en las condiciones descritas, el acusado se mantiene protegido por la presunción de inocencia, la cual desenvuelve su protección de manera absoluta, sin verse el indiciado en la necesidad de desplegar actividades probatorias en favor de su inocencia, más allá de la estricta negación de los hechos imputados, sin perjuicio del derecho de hacerlo; pero cuando la autoridad responsable cumple adecuadamente con sus deberes y ejerce en forma apropiada sus poderes de investigación, resulta factible superar la presunción de inocencia con la apreciación cuidadosa y exhaustiva de los indicios encontrados y su enlace debido, y determinando, en su caso, la autoría o participación del inculpado, con el material obtenido que produzca el convencimiento suficiente, el cual debe impeler al procesado a aportar los elementos de descargo con que cuente o a contribuir con la formulación de inferencias divergentes, para contrarrestar esos fuertes indicios, sin que lo anterior indique desplazar el onus probandi, correspondiente a la autoridad, si el indiciado no lo hace, le pueden resultar indicios adversos, derivados de su silencio o actitud pasiva, porque la reacción natural y ordinaria de una persona imputada cuya situación se pone en peligro con la acumulación de pruebas inculpativas en el curso del proceso, consiste en la adopción de una conducta activa de colaboración con la autoridad, en pro de sus intereses, encaminada a desvanecer los indicios perniciosos, con explicaciones racionales encaminadas a destruirlos o debilitarlos, o con la aportación de medios probatorios para acreditar su inocencia.

Cabe destacar, que el principio *in dubio pro reo*, en sentido negativo, prohíbe a una autoridad o tribunal condenar al acusado si no obtiene la certeza sobre la verdad de la imputación. Ahora bien, la exigencia positiva de dicho principio obliga a absolver al acusado al no obtener la certeza que implique acreditar los hechos por los que se procesa a un individuo.

Asimismo, cabe advertir que el principio en comento es un beneficio para el sujeto imputado en el caso que exista la duda del juzgador frente a las pruebas que obran dentro del expediente, por lo que si en el estudio del presente asunto no se acredita de manera fehaciente la presunta infracción cometida por el sujeto

incoado, al no existir prueba plena que corrobore los hechos imputados, esta autoridad, siguiendo los principios que rigen el *ius puniendi* se encuentra imposibilitada para emitir una resolución condenatoria.

En este sentido, en nuestro sistema jurídico prevalece el principio de presunción de inocencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 16, con relación al 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo establecido en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado mexicano e integrados al orden jurídico mexicano en términos de lo dispuesto en el artículo 133 constitucional, a saber, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, vigente en la República desde el veintitrés de junio de mil novecientos ochenta y uno (artículo 14, apartado 2), y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, vigente en la República desde el veinticuatro de marzo de mil novecientos ochenta (artículo 8, apartado 2).

En los procedimientos sancionadores electorales, tal presunción de inocencia se traduce en el derecho subjetivo de los partidos políticos denunciados a ser considerados inocentes de cualquier infracción, mientras no se presente prueba bastante para derrotarla y de cuya apreciación se derive un resultado sancionatorio. En este sentido, la máxima *in dubio pro reo* (presunción de inocencia) obliga a absolver en caso de duda sobre la culpabilidad o responsabilidad del acusado.

Sirven de apoyo a lo anterior, la tesis relevante emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se transcribe a continuación:

“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE RECONOCERSE ESTE DERECHO FUNDAMENTAL EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES.—El artículo 20, apartado B, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado el dieciocho de junio de dos mil ocho, reconoce expresamente el derecho de presunción de inocencia, consagrada en el derecho comunitario por los artículos 14, apartado 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8°, apartado 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos ratificados por el Estado Mexicano, en términos del artículo 133 de la Constitución federal, como derecho fundamental, que implica la imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les sigue un procedimiento jurisdiccional o administrativo que se desarrolle en forma de juicio, consecuencias previstas para un delito o infracción, cuando no exista prueba que demuestre plenamente su responsabilidad, motivo por el cual, se erige como principio

esencial de todo Estado democrático, en tanto su reconocimiento, favorece una adecuada tutela de derechos fundamentales, entre ellos, la libertad, la dignidad humana y el debido proceso. En atención a los fines que persigue el derecho sancionador electoral, consistentes en establecer un sistema punitivo para inhibir conductas que vulneren los principios rectores en la materia, como la legalidad, certeza, independencia, imparcialidad y objetividad, es incuestionable que el derecho constitucional de presunción de inocencia ha de orientar su instrumentación, en la medida que los procedimientos que se instauran para tal efecto, pueden concluir con la imposición de sanciones que incidan en el ámbito de derechos de los gobernados.

Recurso de apelación. SUP-RAP-71/2008.—Actor: Partido Verde Ecologista de México.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—2 de julio de 2008.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Secretario: Fabricio Fabio Villegas Estudillo.”

Es importante recalcar que, con la aprobación del Dictamen Consolidado se determinarán las irregularidades que se detecten durante la revisión del informe de campaña del sujeto obligado, por lo que en su caso, si se actualizara alguna vulneración en materia de registro y/o comprobación en relación al gasto materia de análisis, ésta será sancionada en la Resolución que en su momento emita este Consejo General.

En las relatadas condiciones, al concatenar el conjunto de medios de prueba existentes, esta autoridad electoral tiene elementos de convicción que le permiten determinar lo siguiente:

- Que en el SIF obra el registro en tiempo y forma de los avisos de realización de los eventos denunciados.
- Que en el SIF, se registró la erogación por los diversos conceptos de gastos denunciados (pirotecnia, gorras, playeras, cubrebocas, banderas, banderines, lonas, mantas, etiquetas, equipo de audio e iluminación, luces artificiales, banda de viento y ring de lucha), y del análisis a la documentación adjunta se confirma que corresponden a las características de tiempo, modo y lugar señalados y denunciados por el quejoso.
- Que el quejoso no aportó mayores elementos de convicción que acreditaran violación alguna a la normatividad en materia de fiscalización.

En razón de lo anterior, este Consejo General estima que no existen elementos que configuren una conducta infractora por parte del C. José Julio González Landeros, candidato a la Presidencia Municipal de Dolores Hidalgo, C.I.N., en el estado de Guanajuato, de lo dispuesto en los artículos 25, numeral 1, incisos i) y n), 54, numeral 1, 79, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos; 96, numeral 1, 121 y 127, numerales 1 a 3, y 143 Quater del Reglamento de Fiscalización; por lo tanto, el procedimiento en que se actúa debe declararse **infundado**

3. Notificación Electrónica

Que con fecha treinta de septiembre de dos mil veinte, en sesión ordinaria, el Consejo General de este Instituto aprobó el Acuerdo INE/CG302/2020, por el que determinó la notificación electrónica de las actuaciones relativas a los procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización.

En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente asunto se haga uso de la notificación electrónica en razón de lo siguiente:

1. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la que se reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para que cumpla ese acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de diversas formas, en forma directa como serían las notificaciones personales, por cédula o por oficio; o de forma implícita, como aquella que surge cuando el interesado ha tenido conocimiento de su existencia, aunque ningún medio de comunicación haya sido empleado.

Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por la pandemia del COVID 19, es que resultó necesario la implementación de herramientas sencillas, rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades propias de la facultad fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto apego a los principios de certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la notificación vía correo electrónico.

2. Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas de notificación la realizada “vía electrónica”.

3. Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del conocimiento de los sujetos obligados la determinación de la autoridad electoral. En consecuencia, se considera que, cumpliendo con los principios de legalidad, certeza, y debido proceso que debe cumplir cualquier acto de autoridad electoral y privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa el país, a causa de la contingencia derivada de la pandemia conocida como

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/253/2021/GTO

COVID-19, este Consejo General aprueba que las notificaciones a los sujetos obligados en materia de fiscalización sean realizadas de manera electrónica.

En ese entendido a fin de dar cabal cumplimiento a los principios rectores que deben regir las actividades relativas a la notificación de las actuaciones instrumentadas durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos Sancionadores en Materia de Fiscalización, este Instituto, considera necesario que las notificaciones se realicen a los sujetos obligados de forma electrónica a través del SIF respecto de aquellos sujetos obligados que cuenten con acceso al módulo de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo CF/018/2017.

En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

R E S U E L V E

PRIMERO. Se declara **infundado** el presente procedimiento administrativo sancionador de queja en materia de fiscalización instaurado en contra del C. José Julio González Landeros, otrora candidato independiente a la Presidencia Municipal de Dolores Hidalgo C.I.N., en el estado de Guanajuato, en los términos del **Considerando 2** de la presente Resolución.

SEGUNDO. Notifíquese electrónicamente la presente Resolución al Partido Acción Nacional, a través del Sistema Integral de Fiscalización, en los términos de lo expuesto en el **Considerando 3** de la presente Resolución.

TERCERO. Notifíquese electrónicamente la presente Resolución al C. José Julio González Landeros a través del Sistema Integral de Fiscalización, en los términos de lo expuesto en el **Considerando 3** de la presente Resolución.

CUARTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en contra de la presente determinación es procedente el “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal, debe interponerse dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/253/2021/GTO

QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

La presente Resolución fue aprobada en lo general en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 22 de julio de 2021, por votación unánime de los Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello.

Se aprobó en lo particular por lo que hace a la exhaustividad en el Proyecto de Resolución originalmente circulado, por nueve votos a favor de los Consejeros Electorales, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello y dos votos en contra de los Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña.

**EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL**

**EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL**

**DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO**

**LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA**